

Guadalajara de Buga, noviembre de 2015.

SEÑOR(A)

**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GUADALAJARA DE
BUGA (REPARTO)**

E. S. D.

**REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y
REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
DEMANDANTE: MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO.
DEMANDADOS: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO –MUNICIPIO DE TULUÁ - SECRETARIA
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.**

Cordial saludo,

FABIAN DAVID OROZCO GONZALEZ, mayor de edad y vecino de Palmira, identificado con la Cedula de Ciudadanía No 14.698.405 de Palmira y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No 225.823 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de Apoderado del Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO**, en calidad de Parte Demandante, por medio del presente escrito me dirijo a Usted, para presentar Demanda bajo el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el Artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¹, en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL - MUNICIPIO DE TULUÁ - SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**, señaladas en dicho acápite denominado “Parte Demandada”, por el desconocimiento de las Acreencias Laborales a las que tienen el pleno del Derecho desde la fecha de vinculación hasta la actualidad mi poderdante, comencemos:

I. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

¹ **Artículo 138. Nulidad y Restablecimiento del Derecho.** Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

I.I.- PARTE CONVOCANTE. Está constituida por la Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO**, mayor de edad y vecino de Tuluá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.162.181 de Bogotá.

I.II.- APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE.

1. **FABIAN DAVID OROZCO GONZALEZ**, mayor de edad y vecino de Palmira, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 14.698.405 de Palmira, y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 225.823 del Consejo Superior de la Judicatura.

I.III.- PARTE CONVOCADA. Es convocada:

1. **EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, entidad representada legalmente por la Doctora **GINA MARÍA PARODY D'ECHEONA**, o quien haga sus veces en cada Etapa Procesal
2. **EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.**
3. **EL MUNICIPIO DE TULUÁ – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**, entidad representada legalmente por el Señor **JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA**, o quien haga sus veces en cada Etapa Procesal.

II. PRETENSIONES

Para efectos del Proceso Judicial mediante el trámite correspondiente y por medio de sentencia debidamente ejecutoriada, pretendo que se profieran las siguientes o similares Declaraciones y Condenas:

- a. **QUE SEDECLARE LA NULIDAD DEL OFICIO No. 300-044-026-1868 del 10 de julio de 2015**, notificado por correo certificado el día 24 de julio de 2015, por el cual la Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá negó **LA PRIMA DE SERVICIOS, LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Y LA BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN** y sus efectos prestacionales al Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO**.

II.I.- A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SE SOLICITARÁ:

Ordenar a la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL - MUNICIPIO DE EL MUNICIPIO DE TULUÁ – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL:**

- a. **RECONOCER y PAGAR** a favor del Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO, LA PRIMA DE SERVICIOS, LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Y LA BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN**, con retroactividad a su vinculación como Docente Oficial por tratarse de Derechos no reconocidos pero vigentes desde el año 1989 cuando se creó

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por la Ley 91 de 1989.

- b. **RECONOCER Y PAGAR** a favor del Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO** la liquidación de las siguientes acreencias laborales: **PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD, AUXILIO DE CESANTÍA, INTERESES A LA CESANTÍA**, desde 1990 o desde la fecha de vinculación, hasta la fecha de reconocimiento y pago incluyendo en la base de **LIQUIDACIÓN LA PRIMA DE SERVICIOS Y LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS**.
- c. **RECONOCER Y PAGAR** a favor del Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO**, los 8 días adicionales de la **PRIMA DE SERVICIOS** del año 2014, liquidada con la totalidad de factores salariales establecidos en el Decreto 1042 de 1978.
- d. Igualmente, incluyendo en la base de liquidación la **PRIMA DE SERVICIOS Y LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS**, se re liquidará a favor del Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO**, **LA PRIMA DE VACACIONES, LA PRIMA DE NAVIDAD, EL AUXILIO DE CESANTÍA, LOS INTERESES A LA CESANTÍA (si tuvieren derecho), la PENSIÓN GRACIA (si tuvieren derecho) y la PENSIÓN DE JUBILACIÓN (si tuvieren derecho)** desde 1990 hasta la fecha de reconocimiento y pago.
- e. Las sumas a **RECONOCER** serán indexadas conforme al **IPC** certificado por el **DANE** entre la fecha en que se debió pagar cada acreencia y la fecha en que efectivamente se pague.
- f. Las sumas a **RECONOCER** en los numerales anteriores devengarán los intereses señalados en el Art. 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo desde la fecha de ejecutoria del fallo.
- g. **ORDENAR** a las entidades Demandadas el Pago de Gastos y Costas Procesales, así como las Agencias en Derecho.

III. HECHOS

1. Mi mandante se vinculó a la Educación Pública como Docente del Municipio de Tuluá – Valle del Cauca.
2. Actualmente la Docente está prestando servicios en la Institución Educativa María Antonia Ruiz, adscrita al Municipio Certificado de Tuluá.
3. Desde la vinculación de mi mandante como Docente no ha percibido la **PRIMA DE SERVICIOS, LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS**, ni la **BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN** establecidas en el Decreto 1042 de 1978 y la ley 91 de 1989.

4. A partir de la vigencia de la Ley 91 de 1989 los Docentes Oficiales tienen Derecho a percibir las mismas acreencias laborales de los Empleados Públicos del Orden Nacional.
5. La **PRIMA DE SERVICIOS, LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Y LA BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN**, forman parte de los Derechos de los Empleados Públicos del Orden Nacional.
6. La **PRIMA DE SERVICIOS y LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS** son factores para la liquidación de la **PRIMA DE VACACIONES, LA PRIMA DE NAVIDAD, EL AUXILIO DE CESANTÍA, LOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, LA PENSIÓN GRACIA Y LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN**.
7. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1545 DE 2013, El Gobierno Nacional dispuso el pago en favor de los Docentes Oficiales para el año 2014 por valor equivalente a 7 días de salario, cuando por ley corresponde 15 días, esto al tenor del Decreto 1042 de 1978.
8. Mi poderdante tiene Derecho a que se les paguen los 8 días de salario restantes de la **PRIMA DE SERVICIOS** del año 2014, así como la re liquidación de la prima de servicios de los años 2014 y 2015, y las **PRIMAS DE SERVICIOS** de los años anteriores al 2014, es decir desde la fecha de su vinculación, la cual debe ser liquidada con los factores salariales establecidos en el mencionado Decreto 1042 de 1978.
9. El día 10 de julio de 2015, se presentó ante la Secretaria de Educación del Municipio de Tuluá, mediante Derecho de Petición identificado con el número de radicado **SAC: 2015PQR3985**, solicitud de Reconocimiento, liquidación y pago de **LAPRIMA DE SERVICIOS, LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Y LA BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN**, con retroactividad a su vinculación como Docente Oficial por tratarse de Derechos no reconocidos pero vigentes desde el año 1989 cuando se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por la Ley 91 de 1989.
10. El día 24 de julio de 2015, a Secretaria de Educación del Municipio de Tuluá, mediante **OFICIO No. 300-044-026-1868 del 10 de julio de 2015**, negó **LA PRIMA DE SERVICIOS, LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Y LA BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN** y sus efectos prestacionales al Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO**.
11. Se solicitó audiencia de conciliación ante la Procuraduría delegada ante lo contencioso administrativo para agotar el requisito de procedibilidad, por lo cual se anexa acta original de fracaso de audiencia de conciliación.
12. El Docente **MANUEL SALVADOR CADAVID BUENO** me ha conferido poder para presentar Demanda bajo el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

1. El artículo 42 del decreto 1042 de 1978 señaló:

ARTÍCULO 42 DEL DECRETO 1042 DE 1078 REZA: (MODIFICADO POR LOS DECRETOS ANUALES SALARIALES) DE OTROS FACTORES DE SALARIO. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

- a) Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto.
- b) Los gastos de representación.
- c) La prima técnica.
- d) El auxilio de transporte.
- e) El auxilio de alimentación.
- f) La prima de servicio.**
- g) La bonificación por servicios prestados.**
- h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.

De las anteriores acreencias se les ha negado a los Docentes Oficiales la **BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Y LA PRIMA DE SERVICIOS.** (Negrillas y subrayados propios).

Estas acreencias son reguladas de la siguiente manera:

ARTÍCULO 45.- DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS. (Modificado por los decretos anuales salariales) A partir de la expedición de este Decreto, **créase una bonificación por servicios prestados** para los funcionarios a que se refiere el artículo 1.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial.

Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.

ARTÍCULO 46.- DE LA CUANTÍA DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS. (MODIFICADO POR LOS DECRETOS ANUALES SALARIALES) La bonificación por servicios prestados será equivalente al veinticinco por ciento de la asignación básica que esté señalada por la ley



para el cargo que ocupe el funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio.

Cuando el funcionario perciba los incrementos de salario por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto, la bonificación será equivalente al veinticinco por ciento del valor conjunto de la asignación básica y de dichos incrementos.

ARTÍCULO 47.- DEL CÓMPUTO DE TIEMPO PARA LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS. *El tiempo de servicios para el primer reconocimiento de la bonificación por servicios prestados se contará así:*

- a) Para los funcionarios que actualmente se hallen vinculados al servicio, desde la fecha de expedición del presente Decreto.*
- b) Para los funcionarios que se vinculen con posterioridad a la vigencia de este Decreto, desde la fecha de su respectiva posesión.*

ARTÍCULO 48.- DEL TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS. *La bonificación por servicios prestados **se pagará dentro de los veinte (20) días** que sigan a la fecha en que se haya causado el derecho a percibirla.*

ARTÍCULO 58.- LA PRIMA DE SERVICIO. *Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto tendrán derecho a una **prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración, que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año.***

Esta prima no se regirá para los funcionarios que con anterioridad tengan asignada esta contraprestación cualquiera que sea su nombre.

ARTÍCULO 59.- DE LA BASE PARA LIQUIDAR LA PRIMA DE SERVICIO. *La prima a que se refiere el artículo anterior se liquidará sobre los factores de salario que se determinan a continuación:*

- a) El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo.*
- b) Los incrementos salariales por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto.*
- c) Los gastos de representación.*
- d) Los auxilios de alimentación y transporte.*
- e) La bonificación por servicios prestados.**

*Para liquidar la **prima de servicio**, se tendrá en cuenta la cuantía de los factores señalados en los ordinales precedentes a 30 de junio de cada año.*

*Al establecer las excepciones a la aplicación del Decreto 1042 de 1978 el literal b) del artículo 104, como ya se manifestó, **en forma clara expresa excluyó a los docentes oficiales.***

Es claro que los Docentes Oficiales fueron excluidos de esta norma, así lo confirma la Corte Constitucional en Sentencia C-566 de 1997, pero, igualmente

se encuentra que la Ley 91 de 1989 al crear el **FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO** redefinió los Derechos Laborales de los Docentes, estableciendo los regímenes que se les aplicarían y las acreencias laborales a las que tendrían Derecho.

Cuando el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 remite al régimen de las Entidades Territoriales para los Docentes de este Orden y los Nacionalizados, pero además señala que los Docentes Oficiales Nacionales tendrán las prestaciones económicas y sociales establecidas en las normas vigentes y aplicables los Empleados Públicos del Orden Nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y el 1945 de 1978 se extendieron a los Docentes Oficiales.

Para reforzar este argumento basta recordar que el parágrafo 2 del numeral 4 del artículo 15 de la ley 91 de 1989 al señalar las prestaciones que no pagará el Fondo Social del Magisterio relacionó las siguientes:

“Primas de navidad, prima de servicios, prima de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte, o movilización y las vacaciones”.

En este orden de ideas aquí se está incluyendo **LA PRIMA DE SERVICIOS**, la misma que se creara con el Decreto 1042 de 1978 a favor de los servidores públicos, por lo que también debía reconocerse **LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS**. Pero hasta la fecha no se ha cumplido con esta norma.

No existe justificación lógica, ni jurídica para excluir a los Docentes Oficiales del beneficio de la **BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Y LA PRIMA DE SERVICIOS**; en el entendido que hay precedentes jurisprudenciales que por principio de igualdad deben ser reconocidos a mis mandantes, evitando así demandas injustificadas contra la entidad.

Es pertinente traer a colación uno de los fallos del **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO**, donde se hizo un examen sistemático de la situación, en los cuales considera lo siguiente:

Magistrado Ponente: RIGOBERTO REYES GÓMEZ, Sentencia de Segunda Instancia, de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011).
Radicado: 63-001-3331-003-2009-00076-01.

*“La igualdad se construye como un límite de la actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de creación frente a la posibilidad arbitraria del poder. **El principio de igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales. De ahí que lo constitucionalmente vetado sea el trato desigual ante situaciones idénticas**”² (Se destaca)*

En otra oportunidad **EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO** ratifico su posición respecto al principio de la igualdad, considerando lo siguiente:

² C.C. Sentencia T-187 del 12 de mayo de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.



*“En cuanto al derecho a la igualdad, esta corporación en sentencia C-677/06, señaló que **tal garantía se predica del trato equitativo que se debe presentar en situaciones equivalentes. De forma tal, si alguna autoridad brinda un tratamiento distinto frente a supuestos fácticos idénticos, se conculca el derecho a la igualdad (...)**, Recuérdese: “El derecho a la igualdad se predica, para su exigencia, de situaciones objetivas y no meramente formales. **En otras palabras, el derecho mencionado debe valorarse a la luz de la identidad entre los iguales y de diferencia entre los desiguales. Así entonces, una norma jurídica no puede efectuar regulaciones diferentes ante supuestos iguales, aunque puede hacerlo si los supuestos son distintos.** Esta manera de concebir el derecho a la igualdad, desde su visión material, evita que el mismo derecho sea observado desde una visión igualitarista y meramente formal. (...)”*

*En resumen, **para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo debe valorarse si el trato diferenciado proveniente de la norma en estudio es efectuado sobre situaciones similares o por el contrario si dicho trato distinto proviene de situaciones diversas.**”³ (Negrilla y subrayado fuera de texto).*

Conforme al desarrollo dado en la Jurisprudencia Constitucional a la igualdad como principio fundamental, se puede colegir que el mismo se predica entre iguales, es decir, en situaciones idénticas o equivalentes, sobre aquellos supuestos fácticos que compartan características similares, en los cuales debe existir un tratamiento de igualdad, por lo tanto cuando se presentan tratos de desigualdad frente a situaciones idénticas, se estaría violando el plurimencionado Derecho. Por el contrario este Principio no es procedente aplicarlo cuando los supuestos fácticos son diferentes, pues no puede predicarse igualdad en situaciones de diversidad.

Así pues, teniendo en cuenta que los Docentes se encuentran en unas circunstancias y condiciones particulares, excepcionales y diferentes a los demás Empleados Públicos, no puede predicarse entre estos y aquellos un tratamiento de igualdad, toda vez que al encontrarse en situaciones disímiles permite el trato normativo diferente, pues como bien se ha mencionado en líneas anteriores los Docentes se encuentran amparados en un régimen prestacional diferente al régimen general que resulta más favorable.

IV.I.- SOBRE LA PRIMA DE SERVICIOS.

El parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, regula la **PRIMA DE SERVICIOS** como un Derecho a favor de los Docentes Nacionales y Nacionalizados, cuyo reconocimiento y pago estará a cargo de la Nación como entidad nominadora:

“Artículo 15.

(...)

*Parágrafo 2. **El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio** no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo*

³ C.C. Sentencia T-473 del 12 de junio de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

*de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, **de servicios** y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones.”. (Subrayado fuera del texto)*

Se observa claramente en la norma transcrita, la intención del Legislador de reconocer el Derecho a la **PRIMA DE SERVICIOS** al personal Docente Nacional o Nacionalizado de las Instituciones Educativas Estatales.

Así mismo, la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha reconocido la inclusión de dicha prima al momento de liquidar otro tipo de prestaciones, tales como las cesantías de un docente, véase:

*“Se deduce entonces, que la Ley 91 de 1989 estableció un régimen que reguló la situación de los docentes, en atención al proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975 y que **implicaba la existencia tanto de docentes vinculados por la Nación como de docentes que habiendo sido vinculados por una entidad territorial, serían nacionalizados.**”*

Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial y los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

En lo que atañe a las cesantías de los docentes nacionalizados, se conservó el sistema de retroactividad para los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, de conformidad con la normativa vigente en la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.

DE LOS FACTORES SALARIALES PARA LIQUIDAR CESANTÍAS DE DOCENTES NACIONALIZADOS

*El Decreto 2712 de 1999 “Por el cual se expiden disposiciones en materia prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales del **orden territorial**”, en su artículo 2º, estableció como factores salariales para la liquidación de las cesantías de estos servidores, siempre y cuando hayan sido autorizados mediante norma de carácter legal, los siguientes: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando constituye factor de salario; los dominicales y feriados; las horas extras; el auxilio de alimentación y transporte; la prima de navidad; la bonificación por servicios prestados; la **prima de servicios**; los viáticos que reciban funcionarios públicos y trabajadores oficiales, cuando se hayan percibido por término no inferior a 180 días en el último año de servicio; la prima de vacaciones; el valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, y primas y bonificaciones que se hubieren otorgado debidamente con anterioridad a la declaratoria de inexecutable del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.*



Luego, el Decreto 1919 de 2002 “Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales **del nivel territorial**”, en su artículo 1º dispuso, que a partir de su vigencia, es decir, desde el 1º de septiembre de 2002, **los empleados públicos vinculados** o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a la Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, **gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.** Y agregó, que las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los factores para ellas establecidas.

Su artículo 3º dispuso, que los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto No. 1252 de 2000.

Por su parte el Decreto No. 1252 de 2000, en su artículo 2º, estableció que los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas, continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.

Ahora bien, el **Auxilio de Cesantías para los empleados de la Rama Ejecutiva Nacional**, se encuentra regulado por el Decreto No. 1045 de 1978 “Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del **sector nacional**”, que en su artículo 45, establece como factores para su liquidación los siguientes: la asignación básica mensual; los gastos de representación y la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, los auxilios de alimentos y transporte, **la prima de navidad**, la bonificación por servicios prestados, **la prima de servicios**, los viáticos que reciban funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por término no inferior a 180 días en el último año de servicio, los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto Ley 710 de 1978, **la prima de vacaciones**, el valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, y primas y bonificaciones que se hubieren otorgado debidamente con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.

Por manera que, los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efecto de liquidar las cesantías de los empleados públicos cobijados por el régimen prestacional del nivel territorial, eran los contemplados por el Decreto No. 2712 de 1999, pero luego con la entrada en vigencia del



Decreto No. 1919 de 2002, es decir, a partir del 1º de septiembre de 2002, estos empleados territoriales cuentan con el mismo régimen de prestaciones sociales establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público Nacional y precisamente, los factores de liquidación del Auxilio de Cesantías de los empleados de la Rama Ejecutiva Nacional se encuentran regulados por el artículo 45 del Decreto No. 1045 de 1978, norma que en consecuencia es la que se debe aplicar a los empleados regidos por el régimen prestacional territorial al momento de liquidar sus cesantías.

DE LAS PRIMAS COMO FACTOR DE LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS

Como se advirtió, de manera particular el Decreto No. 1045 de 1978, que aplica para empleados públicos territoriales, en su artículo 45, señala que las primas que deben tenerse en cuenta como factores para liquidar las cesantías son: las de servicios, vacaciones, navidad y las primas y bonificaciones que se hubieren otorgado debidamente con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.

Para efecto de la liquidación de las referidas primas, es el Decreto 1160 de 1947 4, el que en el inciso 2º de su Parágrafo 1º establece, que en el caso de que el trabajador haya recibido primas o bonificaciones que no tengan el carácter de mensuales, el promedio de la remuneración se obtendrá dividiendo el monto de dichas primas percibidas en el último año de servicio, por doce y sumando tal promedio a la última remuneración fija mensual.

(...)

Ahora bien, en lo que concierne a la liquidación del auxilio de cesantías definitivas de la actora, que fue efectuada de manera anualizada, resalta la Sala, que tal como lo establecieron los numerales 1º y 3º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en lo que a las cesantías de los docentes nacionalizados hace referencia, se conservó la retroactividad de conformidad con las disposiciones vigentes en la entidad territorial; con lo que tampoco resulta ajustada a derecho, la decisión del Fondo acusado de utilizar un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.

En relación con los factores de salario que deben tenerse en cuenta para liquidar las cesantías, señala la Sala que de acuerdo con lo analizado precedentemente, debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, aplicable a los empleados públicos que venían vinculados y cobijados por el régimen prestacional del nivel territorial, por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1919 de 2002, que ordenó que la liquidación de las prestaciones sociales de dichos servidores, goza del mismo régimen establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.

Y es por ello, que dentro de los factores que deben tenerse en cuenta para liquidar las cesantías, además de la asignación básica mensual, los dominicales y festivos, las horas extras, el auxilio de transporte, el valor del



trabajo suplementario y el realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, deben incluirse la prima de navidad, la **prima de servicios** y la prima de vacaciones.

Con relación a las primas para efecto de la liquidación de las cesantías, se advierte, que tal como lo señala el Decreto 1160 de 1947, el promedio de la remuneración se obtiene de dividir el monto de las percibidas en el último año de servicio por 12 y sumando dicho promedio a la última remuneración fija mensual.

Lo anterior, siempre y cuando efectivamente dichas primas hayan sido percibidas por el docente. Y, en este sentido encuentra la Sala que no le asiste la razón al Ministerio Público, cuando señala que la sentencia recurrida debe ser objeto de modificación en cuanto a que el a quo ordenó el pago de las cesantías definitivas con la inclusión de todas las primas percibidas por la demandante aun las no probadas, por lo que solo deben ser reconocidas la de navidad y vacaciones; porque lo cierto es, que aunque en el libelo introductorio fue solicitado expresamente por la demandante el reconocimiento de las “**primas de toda especie...**”, el fallo fue claro en señalar que “**...en caso de haber recibido primas** o remuneraciones **que no tengan carácter mensual se contabilizarán una doceava de la suma que corresponda**”; ello lógico es, de acuerdo con lo probado en el proceso y en atención a que correspondan a las enlistadas en el Decreto 1045 de 1978.

De otro lado, comparte la Sala la decisión de primera instancia cuando ordena que deben ser objeto de deducción las sumas que a título de cesantías parciales fueron reconocidos a la actora, al igual que las cesantías que se le liquidaron como definitivas antes de su efectiva desvinculación, que en realidad eran parciales, y del mismo modo las que se le reconocieron en virtud de la Resolución No. 547 de 2003, ahora acusada.

Corolario de lo anterior, es que para la Sala debe ser confirmada la sentencia objeto del recurso de alzada, con la aclaración que la fecha a partir de la cual deben contabilizarse las cesantías de la docente nacionalizada en forma retroactiva, es el 26 de marzo de 1973”.⁴(Subrayas y Negrillas propias).

No obstante lo anterior, es menester precisar que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 sólo hace referencia al Personal Docente Nacional o Nacionalizado, lo cual en un principio permite inferir que éstos son los únicos beneficiarios de la **PRIMA DE SERVICIOS**, dejando de lado a los Docentes Territoriales.

La Ley 91 de 1989 en su artículo 1º definió las condiciones en que se encontraban los Docentes, ya sea Nacional, Nacionalizado o Territorial de la siguiente manera:

⁴ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" - Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN - veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010) - Radicación número: 63001-23-31-000-2003-01125-01(0620-09) - Actor: ARACELLY GARCÍA QUINTERO



“Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.”

Esta definición realizada por el Legislador a través de la Ley 91 de 1989, se presentó cuando aún la Entidad Nominadora era la Nación, sin embargo con posterioridad se profirió la Ley 60 de 1993, **por medio de la cual la entidad nominadora pasó a ser la respectiva entidad territorial, en virtud de la descentralización administrativa**, situación que continuó con la Ley 715 de 2001 la cual derogó la Ley 60 de 1993, y que igualmente había sido contemplada en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994 “**POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN**”.

Ahora bien, la Ley 812 de 2003 “**POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2003-2006, HACIA UN ESTADO COMUNITARIO**.” Se refirió al régimen prestacional de los Docentes Oficiales de la siguiente manera:

ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos.

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.

El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley, será decretado por el Gobierno Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de 2002, los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente ley y la remuneración de los docentes actuales frente de lo que se desprende de lo ordenado en el presente artículo.

El Gobierno Nacional buscará la manera más eficiente para administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para lo cual contratará estos servicios con aplicación de los principios de celeridad, transparencia, economía e igualdad, que permita seleccionar la entidad fiduciaria que ofrezca y pacte las mejores condiciones de servicio, mercado, solidez y seguridad financiera de conformidad con lo establecido en el artículo 3o de la Ley 91 de 1989. En todo caso el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se administrará en subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de pensiones, cesantías y salud.

El valor que correspondería al incremento en la cotización del empleador por concepto de la aplicación de este artículo, será financiado por recursos del Sistema General de Participaciones y con los recursos que la Nación le transfiera inicialmente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un monto equivalente a la suma que resulte de la revisión del corte de cuentas previsto en la Ley 91 de 1989 y hasta por el monto de dicha deuda, sin detrimento de la obligación de la Nación por el monto de la deuda de cesantías; posteriormente, con recursos del Sistema General de Participaciones y con los recursos que le entregará la Nación a las entidades territoriales para que puedan cumplir con su obligación patronal.

PARÁGRAFO. Autorízase al Gobierno Nacional para revisar y ajustar el corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989.”(Subrayas propias.)

De la norma precitada, se puede colegir que a excepción de prestaciones económicas, como lo es, la pensión, el régimen prestacional es igual para los Docentes, sin importar su modo de vinculación, ya sea, Nacional, Nacionalizado o Territorial, pues se permite inferir que la intención del Legislador fue establecer las mismas condiciones para los Docentes en cuanto a factores salariales y prestacionales, dando aplicación a la Igualdad como Derecho Fundamental dentro del Estado Social de Derecho.

En este orden de ideas, es claro entonces que la **PRIMA DE SERVICIOS** debe ser reconocida no solo a los Docentes Nacionales y Nacionalizados, sino también a los Territoriales, en aras de garantizar el Derecho a la Igualdad, esto de conformidad con lo establecido en la Ley 812 de 1993.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que mis mandantes son merecedoras de dicha prestación, fueron ellos los que prestaron sus servicios como Docentes en el Municipio de Tuluá – Valle del Cauca, es por ello que es procedente reconocerle la **PRIMA DE SERVICIOS**, por estar este concepto contemplado dentro del régimen Docente, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, concepto que deberá ser reconocido por el **Municipio de Tuluá – Valle del Cauca, por ser la entidad nominadora**, en virtud de la Descentralización Administrativa Docente, de conformidad con las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, y se liquidará proporcional al tiempo de servicios cumplidos en cada año, de conformidad con el artículo 60 del Decreto 1042 de 1978, modificado por el artículo 7 del Decreto 31 de 1997⁵ y artículo 6 del Decreto 600 de 2007⁶ **“POR EL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS DE ASIGNACIÓN BÁSICA DE LOS EMPLEOS QUE SEAN DESEMPEÑADOS POR EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA RAMA EJECUTIVA, CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, DEL ORDEN NACIONAL Y SE DICTAN DISPOSICIONES”**.

Es por ello que no hay ninguna justificación lógica ni jurídica para excluir a los Docentes Oficiales del beneficio de la **PRIMA DE SERVICIOS Y LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS**.

IV.II.- OTROS PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES.

- A. La Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado en Sentencia del 22 de marzo de 2012, con radicación **68001-23-31-000-2001-02589-**

⁵ ARTICULO 60. DEL PAGO PROPORCIONAL DE LA PRIMA DE SERVICIO. <Modificado por el artículo 7 del Decreto 31 de 1997. El nuevo texto es el siguiente> Cuando a treinta (30) de junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicio, de que trata el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978, siempre que hubiere prestado sus servicios al organismo por un término mínimo de seis (6) meses.

También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta prima cuando el empleado se retire del servicio y haya prestado sus servicios por un término mínimo de seis (6) meses. En este evento la liquidación se efectuará teniendo en cuenta la cuantía de los factores señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978 causados a la fecha de retiro.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, cuando un funcionario pase del servicio de una entidad a otra, el tiempo laborado en la primera se computará para efectos de la liquidación de esta prima, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince (15) días hábiles entre el retiro de una entidad y el ingreso a otra.

⁶ Artículo 6°. Pago proporcional de la prima de servicios. Cuando a treinta (30) de junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978, siempre que hubiere prestado sus servicios al organismo por un término mínimo de seis (6) meses.

También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta prima cuando el empleado se retire del servicio y haya prestado sus servicios por un término mínimo de seis (6) meses. En este evento la liquidación se efectuará teniendo en cuenta la cuantía de los factores señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978 causados a la fecha de retiro.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, cuando un funcionario pase del servicio de una entidad a otra, el tiempo laborado en la primera se computará para efectos de la liquidación de esta prima, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince (15) días hábiles entre el retiro de una entidad y el ingreso a otra.

01(2483-10), siendo ponente el Doctor **GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN** reconoció el Derecho de los Docentes a percibir la **PRIMA DE SERVICIOS**.

- B. La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-1066 de 2012 reconoce que los Docentes Oficiales tienen Derecho a la **PRIMA DE SERVICIOS**.
- C. La Sala Plena del H. Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 06 de Agosto de 2015, proferida en el Expediente 150012220120130013401, número interno 3828-2014, reconoció el Derecho de los Docentes a percibir la **PRIMA DE SERVICIOS**, al igual que su respectivo Retroactivo.

IV. PRUEBAS.

1. Copia del Decreto de Nombramiento No. 0193 del 24 de julio de 2003.
2. Copia del Acta de Posesión No. 142 del 24 de julio de 2003.
3. Copia de Certificados de Factores Salariales
4. Copia de los Desprendibles de Pago de los últimos años.
5. Reclamación Administrativa presentada ante la Secretaria de Educación del Municipio de Tuluá.
6. Respuesta emitida por la Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá.
7. Constancia de conciliación extrajudicial fallida.

DOCUMENTALES SOLICITADAS:

Ante la renuencia de la administración del Municipio de Tuluá, en proporcionar la documentación requerida por mi mandante. Sírvase señor Juez(a) ordenar a la entidad que de manera previa aporte al proceso la siguiente:

- Copia del Tiempo de Servicios del Docente.

VI. PETICIÓN PREVIA

Si el(la) señor(a) Juez(a) considera que los actos administrativos demandados, no cumplen con la exigencia establecidas en el Código Contencioso por no llevar la Constancia de notificación , antes de la admisión de la Demanda, de la manera más respetuosa solicito se requiera a la entidad demandada los mismo con su respectiva constancia, dado a que a pesar de nuestra insistencia de que nos fueran notificados personalmente, estos fueron enviados a nuestra oficina y no quisieron ser notificados, situación que manifiesto bajo la gravedad del juramento . Sin embargo, aparece la constancia de su expedición y el término de

caducidad no ha vencido, que es finalmente para lo que interesa tal constancia, manifestando desde ahora que los conozco plenamente.

De manera respetuosa solicito, requerir a la parte demandada para que allegue el tiempo de servicio y certificado de salarios actualizados de mi poderdante los cuales reposan en el archivo de la entidad.

VII. ANEXOS

1. Los Documentos Aducidos como Pruebas.
2. Copia de la Demanda y los anexos para cada una de los entidades Demandadas.
3. Poder conferido para presentar la presente Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
4. CD, con el contenido del presente escrito en formato Word y en PDF al igual que todas las pruebas enunciadas anteriormente, para los trámites pertinentes que considere el Honorable Despacho.

VI. JURAMENTO

Declaro bajo la gravedad del juramento, que mi representada no ha presentado ninguna solicitud de conciliación encaminada a la nulidad de los Actos Administrativos antes indicados.

VII. CUANTIA

La cuantía procesal se estima conforme a lo establecido en el Artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, la cual establece que la cuantía procesal se estima conforme al valor de la sumatoria de los últimos 3 años, lo cual no implica que el presente Medio de Control tenga como único monto el aquí establecido, puesto que se pretende reclamar la el total de los derechos laborales del mandante causados desde 1990. Dicho lo anterior se determina la Cuantía de la Siguiente manera:

CONCEPTO	Año 2012	Año 2013 ⁷	Año 2014	Año 2015 ⁸
PRIMA DE SERVICIOS	\$1.442.867,65	\$1.409.953,19	\$1.393.450,16	\$1.58.301,37
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$981.383,67	\$958.996,19	\$947.771,77	\$923.864,90
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$147.947,33	\$153.036,73	\$157.536,07	\$166.526,00
DIFERENCIA RELIQUIDACIÓN PRIMA DE VACACIONES	\$393.382,14	\$320.926,24	\$234.971,58	XXXX

⁷ Valores que incluyen liquidación Horas Extras.

⁸Valores Causados hasta el momento de la Solicitud.

DIFERENCIA RELIQUIDACIÓN PRIMA DE NAVIDAD	\$769.250,69	\$620.153,42	\$442.172,77	XXXX
DIFERENCIA RELIQUIDACIÓN CESANTÍAS	\$298.907,01	\$275.835,78	\$205.582,52	XXXX
TOTAL	\$4.033.738,49	\$3.738.901,86	\$3.381.484,87	\$2.248.692,27
VALORES INDEXADOS 2015⁹	\$4.433.240,21	\$4.031.088,00	\$3.517.095,53	\$2.248.692,27
TOTAL CUANTIA ESTIMATORIA DEL PROCESO: \$14.430.116,01				

X. PROCEDENCIA

La presente Demanda es procedente, toda vez que el Medio de Control que se pretende precaver se encuentra vigente, al tenor de la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 164, numeral 2 literal D, establece:

“D.- Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

XI. COMPETENCIA

Es Usted competente Señor Juez(a), para conocer el presente tramite, toda vez que en el presente litigio suscitado a raíz de los hechos expuestos en precedencia, corresponde conocerlos a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la cual se destaca tan H. Despacho, de conformidad con la ley 1437 de 2011, que en su artículo 104 describe:

“ La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo esta instituida para conocer, además de los dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios generados en actos, contratos, hechos, omisiones, operaciones sujetos al Derecho Administrativo, en los que estén involucradas las Entidades Públicas o particulares cuando ejerzan Función Administrativa (...)”

Además, el artículo 155 ibídem establece que:

“Los Jueces Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

“2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan

⁹Valores Indexados a Agosto de 2015.

actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Por su parte el artículo 157 del mismo ordenamiento determina:

“Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuándo se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años”.

XII. NOTIFICACIONES

El Ministerio de Educación y El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la Calle 43 No. 57 - 14, Centro Administrativo Nacional - CAN - Bogotá D.C, teléfono: 222 02 06, Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.

El Municipio de Tuluá – Secretaria de Educación Municipal, en la Carrera 25 No. 25 - 04 - Tuluá - Valle del Cauca, teléfono: 233 9300, Correo Electrónico: asesoria_juridica@tulua.gov.co.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la Carrera 7 No. 75 – 66, Pisos 2 y 3, teléfono: 255 89 55 Bogotá D.C. Correo Electrónico: procesos@defensajuridica.gov.co.

El Demandante podrá ser notificado en la Carrera 26 No. 54-78 de la Ciudad de Palmira.

La del Suscrito las recibiré en la Calle 42 No. 30ª-20 Oficina 201 de la ciudad de Palmira – Valle del Cauca, Teléfono: 283 1940 – 3153574617 – 3006728868 –, correo electrónico: notificacionesorozcosalgado@hotmail.com.

Con el Respeto que impone la Toga, atentamente.

FABIÁN DAVID OROZCO GONZÁLEZ

C. C. No. 14.698.405 de Palmira

T.P. No. 225.823 del C.S. de la J.